

**CONSTANCIA:** En la fecha se realiza llamada al abonado No 3163276320, se establece comunicación con la accionante, quien manifiesta que la entidad procedió a remitir la respuesta pero que hasta la fecha no le ha dado claridad sobre los cobros a su tarjeta crédito 003.....7356, en el mes de noviembre del 2020 por valor de \$2.539.543 y del mes de marzo del 2021 por valor de \$108.701, así mismo advierte que una vez remitida la respuesta por parte de Alcaldía de Medellín, sobre el impuesto predial este no presenta alteraciones, y el trámite ante valoración no pudo culminar pues la entidad le requirió un poder adicional, sin embargo ella no procedió a solicitarlo ante el Banco, pues considera que ante la relación contractual con la entidad tutelada es esta quien debe proporcionarle los soportes de los cobros y no ella proceder a realizar las solicitudes ante las entidades.

30 de abril 2021.



MARCELA CHICA ACEVEDO  
Escribiente



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN**  
**Medellín, tres (03) de mayo de dos mil veintiuno (2021)**

<b>PROCESO</b>	Acción de Tutela
<b>ACCIONANTE</b>	NATALIA MONTOYA QUICENO
<b>ACCIONADO</b>	BANCO DAVIVIENDA
<b>PROCEDENCIA</b>	Reparto
<b>RADICADO</b>	Nº 05001 40 03 014 <b>2021 00438</b> 00
<b>INSTANCIA</b>	Primera
<b>TEMAS Y SUBTEMAS</b>	Petición
<b>DECISIÓN</b>	No concede tutela- hecho superado
<b>SENTENCIA</b>	<b>101</b>

Procede el Despacho a resolver la solicitud de tutela promovida por NATALIA MONTOYA QUICENO en contra de la BANCO DAVIVIENDA, encaminada a proteger su derecho fundamental de Petición.

## I. ANTECEDENTES

**1.1 Supuestos fácticos y pretensiones-** En síntesis, manifestó la accionante que, desde el 11 de noviembre de 2020 y hasta la fecha ha venido solicitando a la entidad Bancaria le sean suministrados los soportes de los pagos diferentes a la cuota de leasing; es decir los cobros de impuesto predial, cobros por valorización y otros que se me han generado y desconozco su soporte y/o finalidad de pago, en relación con el contrato de Leasing Habitacional N° 0600303960004278 sobre el inmueble ubicado en el edificio Montesorro en la Carrera 29 No 5-16 apartamento 501, Barrio el Poblado, de la Ciudad de Medellín; Matricula Inmobiliaria No. 001-489344; Código Catastral 050010105140900050008901990014.

Expone que dichas solicitudes fueron presentadas así:

- 11 de diciembre de 2020; mediante visita a la sucursal del centro comercial el tesoro, la cual fue atendida por Cristian Muñoz funcionario de la entidad en el cargo de asesor.
- 12 de diciembre de 2020; mediante chat y correo electrónico, la cual fue atendida por Cristian Muñoz, funcionario de la entidad en cargo de asesor.
- 22 de diciembre de 2020; mediante (correo electrónico) la cual fue atendida por Alba Neydis Mengura, funcionario de la entidad en el cargo de operaciones y reclamos.
- Mediante radicado 1-22514703176 con asunto Aclaración impuesto predial, de fecha 7 de abril de 2021; radicado mediante canal virtual, solicita nuevamente aclaración información sobre los cargos a su Tarjeta de Crédito virtual terminada en 0032\*\*\*\*7356; de lo cual obtuve respuesta en el término ya por mi conocido pues se evidencia en los movimientos de citada tarjeta de crédito, siendo enlistados los débitos efectuados, mas no entregados los soportes que causaron dichos débitos, a lo cual se dirige mi Petición.

Por lo cual solicita mediante la presente acción constitucional, solicita se ordene a la entidad, Certificar todos y cada uno de los pagos efectuados en virtud del Leasing habitacional ampliamente publicitado y se le entregue los correspondientes soportes,

de los pagos distintos a las cuotas del Leasing Habitacional; es decir entregue las copias de los soportes del cobro de Impuesto Predial, Valorización y todas las demás que me hayan sido cobradas hasta la fecha.

**1.2.- Trámite.** - Admitida la solicitud de tutela el 26 de abril hogañó, se ordenó la notificación a la accionada.

**1.2.1** BANCO DAVIVIENDA, manifestó que, En la fecha se remitió respuesta a la accionante adjuntándole el histórico de pagos del leasing habitacional donde se pueden evidenciar cada uno de los pagos realizados desde el desembolso hasta la fecha y su respectiva distribución, el informe con la relación de gastos administrativos correspondientes al leasing habitacional N°0600\*\*\*\*\*4278, que fueron asumidos por el Banco Davivienda, y el histórico de movimientos de la tarjeta N°0032\*\*\*\*\*7356, donde se puede evidenciar los cargos y pagos realizados para cubrir los valores de impuesto predial y valorización. A la fecha la tarjeta presenta un saldo total por valor de \$1.222.227,15.

Respecto a las copias de las facturas por pago de impuesto predial y valorización, se le informa que no es posible suministrar la información debido a que en la misma factura se relacionan todos los inmuebles de Leasing del Municipio, por lo tanto, se solicitó ante el Municipio la remisión de la factura individual, y que una vez recibamos la información, le será compartida por este mismo medio.

## **II. CONSIDERACIONES**

**2.1. Competencia.** - Esta agencia judicial es competente para conocer y fallar de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 86 de la Constitución Nacional, art. 37 del Decreto 2591 de 1991 y el inciso 2°, numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.

**2.2. Problema jurídico.** - Corresponde al Juez Constitucional determinar si en este caso es procedente la acción de tutela para ordenarle a la accionada, dar respuesta a las diversas peticiones presentadas desde el 11 noviembre 2020, ante los diferentes canales de la entidad, o si por su parte a misma ya fue resuelta y comunicada a la accionante.

**2.3. Marco Normativo aplicable.** - Constitución Política: Arts. 1, 2, 11, 48, 49, 86, 228, 230. Decreto 2591 de 1991: Arts. 1, 5, 10, 23, 27, 29, 42. Decreto 306 de 1992: Arts. 4 y 6. Decreto 1382 de 2000.

**2.4. De la acción de tutela** - La acción de tutela conforme al artículo 86 de la Carta Política de 1991, es un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo para la protección de los derechos invocados, o cuando existiendo otro medio de defensa judicial, se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991).

La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. De manera que, al existir estos mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que quien alega la afectación de sus derechos debe agotar los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto, exigencia ésta que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrita, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes.

**2.5. DERECHO DE PETICIÓN.** - En el marco de una democracia participativa, el derecho de petición cumple un papel relevante como factor esencial del estado social de derecho. Es por el ello que la propia Constitución Política lo consagra expresamente en su artículo 23 y le reconoce el carácter de derecho fundamental. Al respecto, la citada norma dispone que "*toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución*".

Ahora, normativamente el derecho de petición se encuentra regulado en la Ley 1755 de 2015, que modificó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableciendo como término general para resolver las distintas modalidades de peticiones, los **quince (15) días** siguientes a la recepción, señalando plazos diferentes cuando se trata de peticiones de documentos y de información (diez (10) días) y las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo (treinta (30) días).

La Corte Constitucional en la sentencia de T-332 de 2015 se ha referido en distintas oportunidades a la importancia de esta garantía fundamental, cuya efectividad, según se ha reconocido, *"resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio de la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas (artículo 2o. Constitución Política)"*<sup>1</sup>.

*A partir de esta garantía la jurisprudencia ha fijado una serie de reglas y de parámetros relacionados con el alcance, núcleo esencial y contenido de este derecho. Al respecto ha precisado lo siguiente:*

*"a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.*

*b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.*

*c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. **ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.***

---

<sup>1</sup> Sentencia T-012 de 1992.

d) *Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.*

e) *Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.*

f) *La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.*

g). *En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver (norma que fue derogada por la ley 1255 de 2015). De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.*

h) *La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.*

i) *El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Ver Sentencia T-377 de 2000, T-173 de 2013, T-211-14, entre otras.

**2.6.- EL CONCEPTO DE HECHO SUPERADO.** - La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales. De modo que, cuando la amenaza a los derechos fundamentales de quien invoca su protección cesa, ya sea porque la situación que propiciaba dicha amenaza desapareció o fue superada, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela pierde su razón de ser como mecanismo de protección judicial, en la medida en que cualquier decisión que el juez de tutela pueda adoptar frente al caso concreto carecerá de fundamento fáctico.

Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte en la T-011 de 2016 ha indicado que *"la acción de tutela, en principio, "pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo"*<sup>3</sup>. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz<sup>4</sup>.

*En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y "previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales"*<sup>5</sup>. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela."

**2.7. El caso en estudio y solución al problema jurídico planteado.** - En este caso, la accionante soportó su petición, anexando imágenes de las conversaciones adelantadas por intermedio del chat y pagina de la entidad, así como de sus gestiones ante las entidades encargadas ante las entidades de los cobros de predial y valorización.

Así, si el núcleo esencial del derecho de petición, reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada, que debe darse en un tiempo razonable y que debe ser comunicada al peticionario; en este caso, NATALIA MONTOYA QUICENO mediante derecho de petición dirigido a la BANCO DAVIVIENDA, radicó solicitud, en

caminada a que la entidad Bancaria le suministre los soportes de los pagos diferentes a la cuota de leasing; es decir los cobros de impuesto predial, cobros por valorización y otros que se le han generado y desconoce su soporte y/o finalidad de pago, en relación con el contrato de Leasing Habitacional N° 0600303960004278 sobre el inmueble ubicado en el edificio Montesorro en la Carrera 29 No 5-16 apartamento 501, Barrio el Poblado, de la Ciudad de Medellín; Matricula Inmobiliaria No. 001-489344; Código Catastral 050010105140900050008901990014.

En respuesta dada por la accionante manifiesta haber dado respuesta y anexa la respuesta emitida, prueba del respectivo envío del correo a montoyanatalia@hotmail.com; frente a lo anterior, a fin de verificar lo manifestado por la entidad, tal como se evidencia de la constancia precedente, se establece comunicación con la tutelante quien manifiesta; que la entidad procedió a remitir la respuesta pero que hasta la fecha no le ha dado claridad sobre los cobros a su tarjeta crédito 003.....7356, en el mes de noviembre del 2020 por valor de \$2.539.543 y del mes de marzo del 2021 por valor de \$108.701, así mismo advierte que una vez remitida la respuesta por parte de Alcaldía de Medellín, sobre el impuesto predial este no presenta alteraciones, y el trámite ante valorización no pudo culminar pues la entidad le requirió un poder adicional, sin embargo ella no procedió a solicitarlo ante el Banco, pues considera que ante la relación contractual con la entidad tutelada es esta quien debe proporcionarle los soportes de los cobros y no ella proceder a realizar las solicitudes ante las entidades.

Ahora dada la respuesta de la parte tutelante, tal como consta en constancia que antecede, y transcrita en párrafo precedente, se procede a verificar las peticiones presentadas por la accionante y se evidencia que solicitó a la entidad certificado de todos y cada uno de los pagos efectuados en virtud del Leasing habitacional, los que se evidencian en respuesta remitida a la tutelante y anexada al Despacho la cual fue enviada al correo de la tutelante el 4/29/2021 6:44:07 PM, misma que guarda estrecha relación con la aportada por la accionante en los anexos de las peticiones realizadas a la entidad, en igual forma se evidencia en respuesta de la misma fecha que la entidad indica sobre los recibos requeridos por la tutelante: respecto a las copias de las facturas por pago de impuesto predial y valorización, se le informa que no es posible suministrar la información debido a que en la misma factura se relacionan todos los inmuebles de Leasing del Municipio, por lo tanto, se solicitó ante

el Municipio la remisión de la factura individual, y que una vez recibamos la información, le será compartida por este mismo medio.

De allí que nos encontremos ante una carencia de objeto por hecho superado, ya que la BANCO DAVIVIENDA emitió respuesta la cual fue comunicada al correo [montoyanatalia@hotmail.com](mailto:montoyanatalia@hotmail.com) indicando además que para el envío de soportes de los cobros de predial y valorización, realizó la solicitud a la entidad competente y una vez los mismos le sean entregados procederá con la remisión.

**Ahora bien, cuando quiera que la respuesta no sea del agrado del accionante por no serle favorable, tendrá que debatir el sentido de la misma**, pero ello no quiere decir que haya vulneración del derecho de petición, pues como indicó la Corte Constitucional en Sentencia S-T. 206 de 2018 lo siguiente:

*"El segundo elemento implica que las autoridades públicas y los particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber de resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; en otras palabras, implica resolver materialmente la petición. La jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo deber ser: "(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex Novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente". **En esa dirección, este Tribunal ha sostenido "que se debe dar resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva"** (Negrillas propias)*

En mérito de lo dicho, **EL JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato constitucional,

**I. FALLA:**

**PRIMERO: DENEGAR** la presente acción de tutela **POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO** promovido por NATALIA MONTOYA QUICENO en contra de la BANCO DAVIVIENDA, por los motivos expuestos.

**SEGUNDO: NOTIFÍQUESE** esta decisión a los interesados por el medio más expedito y eficaz, conforme a lo normado en el artículo 30 del Decreto 2591/91.

**TERCERO.** Esta decisión puede ser impugnada dentro de los tres (03) días siguientes a su notificación. Una vez ejecutoriada y de no ser recurrida, remítase el expediente ante la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE.**

**JHON FREDY CARDONA ACEVEDO**  
**Juez**

**MCH**

Firmado Por:

**JHON FREDY CARDONA ACEVEDO**  
**JUEZ MUNICIPAL**  
**JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **685709c9a0474dbaf80d3140fb9fde1fec982b3ac013f6ee8560621c0bb08742**

Documento generado en 03/05/2021 08:39:46 AM